

**RD 2016-00158 - Alegatos de conclusion**

Oficina Jurídica &lt;juridica@pasto.gov.co&gt;

Vie 06/11/2020 15:20

**Para:** Despacho 04 Tribunal Administrativo - Nariño - Pasto <des04tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co>**CC:** Fundaciónhps@hospitalsanpedro.org <Fundaciónhps@hospitalsanpedro.org>; Leyes1505@gmail.com <Leyes1505@gmail.com> 1 archivos adjuntos (307 KB)

alegatos de conclusión segunda instancia 2016-158.pdf;

Doctor

**PAULO LEÓN ESPAÑA PANTOJA**

Magistrado

H. Tribunal Administrativo de Nariño

E.S.D.

<b>REF.:</b>	<b>PROCESO N°:</b>	2016-158
	<b>MEDIO DE CONTROL:</b>	REPARACIÓN DIRECTA
	<b>DEMANDANTE:</b>	FABIO CAMILO CASTILLO Y OTROS
	<b>DEMANDADO:</b>	MUNICIPIO DE PASTO Y HOSPITAL SAN PEDRO
	<b>ACTUACIÓN:</b>	ESCRITO DE ALEGACIONES SEGUNDA INSTANCIA

Por medio del presente se remite alegatos de conclusión en segunda instancia.

Atentamente,

Carlos Narvaez Bacca

Apoderado Judicial


Municipio de Pasto

Correo electrónico: [carlosnarvaezbacca@hotmail.com](mailto:carlosnarvaezbacca@hotmail.com)

--

IMPORTANTE: Este mensaje y sus anexos son confidenciales y está dirigido exclusivamente a su destinatario. Puede contener información privilegiada o confidencial protegida legalmente. Si usted ha recibido este mensaje por error, bórelo en su totalidad, notifique de tal hecho al remitente y abstenerse de divulgar su contenido.

Cuidemos el medio ambiente, Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN JURÍDICA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	<b>ACTUACIONES JUDICIALES</b>			
	<b>VIGENCIA</b> 28-oct-19	<b>VERSIÓN</b> 01	<b>CÓDIGO</b> GJ-F-054	<b>PAGINA</b> 1 de 4

San Juan de Pasto, 6 de noviembre de 2020

Doctor  
**PAULO LEÓN ESPAÑA PANTOJA**  
Magistrado  
H. Tribunal Administrativo de Nariño  
E.S.D.

**REF.: PROCESO N°:** 2016-158  
**MEDIO DE CONTROL:** REPARACIÓN DIRECTA  
**DEMANDANTE:** FABIO CAMILO CASTILLO Y OTROS  
**DEMANDADO:** MUNICIPIO DE PASTO Y HOSPITAL SAN PEDRO  
**ACTUACIÓN:** ESCRITO DE ALEGACIONES SEGUNDA INSTANCIA

**CARLOS DAVID NARVÁEZ BACCA**, mayor de edad, domiciliado y residente en Pasto, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.085.277.962 de Pasto, Abogado en ejercicio portador de la T.P. N° 219233 del C.S. de la J., actuando en calidad de apoderado judicial del MUNICIPIO DE PASTO, me dirijo respetuosamente ante Usted con el fin de recorrer el traslado para presentar alegaciones dispuesto en Auto de 16 de octubre de 2020, escrito que se presenta dentro de la oportunidad legal, el cual se sustenta en los siguientes términos:


**I.- CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE DECIDIR EL RECURSO DE APELACIÓN:**

El litigio planteado por la parte demandante fue resuelto en primera instancia por el señor Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto mediante sentencia de 16 de octubre de 2019. Dicha decisión judicial fue favorable para la parte demandada que se conforma por el municipio de Pasto y por la Fundación Hospital San Pedro; es decir, se despacharon desfavorablemente las pretensiones incoadas por la parte demandante,

Considero que la sentencia emitida por el A quo debe ser confirmada en atención a los siguientes fundamentos:

Inicialmente se debe precisar que el motivo por el cual la parte actora instauró la demanda es porque él considera que el accidente de tránsito que sufrió el día 27 de abril de 2014 aproximadamente las 01:20 horas cuando conducía la motocicleta de placas DIJ-25D en el sector de la carrera 27 N° 12-16 del barrio San Felipe de esta ciudad, es de responsabilidad del municipio de Pasto en razón a la presencia de un hueco situado en la calle por donde él transitaba, y en su sentir, considera que existió una falla del servicio representada en la omisión del mantenimiento de la malla vial en la vía pública y la falta de señalización que permitan alertar sobre el peligro de la existencia del hueco. De ahí que, la parte actora atribuye responsabilidad al municipio de Pasto por haber sufrido el accidente y las lesiones en su cuerpo.

Sin embargo, desde la contestación de la demanda, en la práctica de las pruebas testimoniales, y en la etapa de alegatos de conclusión, el municipio de Pasto ha planteado su defensa explicándole al A quo que el accidente sufrido por el señor Fabio Camilo Castillo no se constituye en un daño antijurídico que no estaba en deber de soportar, pues, se el demandante en el día de los hechos realizó una actividad contraria

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN JURÍDICA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	<b>ACTUACIONES JUDICIALES</b>			
	<b>VIGENCIA</b> 28-oct-19	<b>VERSIÓN</b> 01	<b>CÓDIGO</b> GJ-F-054	<b>PAGINA</b> 2 de 4

a derecho consistente en guiar o manejar una motocicleta sin haber obtenido su licencia de conducción.

En ese sentido, el señor Fabio Camilo Castillo al ser consciente que no podía conducir una motocicleta por carecer del documento público de la Licencia de conducción, obró de manera dolosa desconociendo abiertamente las normas de tránsito, y por ello debe soportar las consecuencias de su actuar ilegal. Así pues, mal puede aseverarse que el Estado – municipio de Pasto – deba reconocerle y pagarle las pretensiones solicitadas cuando él mismo dio lugar al acaecimiento de su accidente.

Igualmente se explicó en la primera instancia que, si bien es cierto, al Estado le corresponde velar por la seguridad de las calles y vías públicas, también debe tenerse en cuenta que no todas las personas están habilitadas o autorizadas para maniobrar medios de transporte, y en este caso, el señor Fabio Camilo Castillo al no ser titular de ninguna Licencia de tránsito, sencillamente no podía conducir la motocicleta, y por esa razón, si el demandante hubiese sido respetuoso de la norma de tránsito la consecuencia es que este accidente jamás hubiese sucedido.


Además, al A quo se le solicitó valorar en la etapa de alegatos de conclusión que el señor testigo Jorge Bolívar Jojoa en su condición de agente de tránsito que atendió el caso del accidente, explicó en audiencia que el lugar de los hechos contaba con buena iluminación de alumbrado público, también que el pavimento se encontraba seco, sin lluvia en ese momento, y por ello, las condiciones para transitar por el lugar eran seguras, si se tiene en cuenta que el hueco no era de grandes dimensiones y además no se encontraba en medio de la calle, por lo cual si se conducía a una velocidad prudente sin exceso de velocidad era factible su detección precisamente para esquivarlo y seguir el trayecto.

Por lo tanto, se solicitó al A quo llegar al convencimiento de que el accidente sufrido por el señor Fabio Camilo Castillo no es un daño antijurídico provocado por el Estado, siendo responsable el mismo demandante por dar lugar a este acontecimiento al ejercer una actividad contraria a derecho, y por consiguiente debe asumir las consecuencias de su comportamiento irresponsable.

Luego, en sentencia, el Juez de primera instancia acogió la postura de defensa del municipio de Pasto en el siguiente sentido:

*“(…) Por lo anterior, tenemos probada que frente al accidente existe una causal determinante, cual es la falta de pericia del conductor, aspecto que se dilucida con las características del lugar en donde suceden los hechos, en una de las vías más amplias de la ciudad, amén de la carencia de licencia de conducción del señor Castillo Riascos, quien a pesar de no contar con dicho documento que lo acredita legalmente para asumir una actividad riesgosa como lo es la conducción de cualquier tipo de vehículo, y sin que la motocicleta sea de su propiedad, decidió asumir el riesgo de conducir a altas horas de la noche, configurándose así una causal de exclusión de responsabilidad de la entidad demandada.*

*Por lo anterior, frente a la posible responsabilidad en cabeza del MUNICIPIO DE PASTO, se encuentra probada la excepción denominada CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, al encontrar que el demandante FABIO CAMILO CASTILLO se sometió al riesgo que implica la conducción sin contar con licencia para ello que acredite su pericia para ejercer dicha actividad riesgosa, concluyendo además los*


 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN JURÍDICA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	<b>ACTUACIONES JUDICIALES</b>			
	<b>VIGENCIA</b> 28-oct-19	<b>VERSIÓN</b> 01	<b>CÓDIGO</b> GJ-F-054	<b>PAGINA</b> 3 de 4

*agentes de policía y de tránsito que asistieron el accidente, que la causa eficiente del mismo fue que el actor no estuvo atento a la vía (...)"*

En ese entendido, considero que este razonamiento del A quo es ajustado a derecho porque, en efecto, en la contestación de la demanda se propuso la excepción de CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA con fundamento en que el demandante por carecer de licencia de conducción tal y como lo exige la Ley 769 de 2002, sencillamente no estaba habilitado jurídicamente ni técnicamente para maniobrar vehículos ni motocicletas.

Sin embargo, el apoderado de la parte demandante de manera temeraria desconoce en su recurso de apelación contra la sentencia que el municipio de Pasto es responsable del accidente del señor Castillo debido a la falta de mantenimiento de la vía por donde transitaba, pero, sea esta la oportunidad para manifestar que dicho recurso de alzada debe ser despachado de manera desfavorable, es decir, la sentencia del A quo debe ser confirmada en razón a las siguientes reflexiones:

- (i) El Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) establece unos deberes para los conductores de vehículos, ente los cuales se encuentra la obtención de licencia de conducción, so pena de incurrir en una contravención por infracción a las normas de tránsito, como lo es la infracción prevista en el código D1 del artículo 131 ibídem, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, la cual dispone: *“Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos, hasta que este sea retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia de conducción.”*
- (ii) El ordenamiento jurídico impone el deber de obtener licencia de conducción a quienes deseen conducir vehículos – automóviles o motocicletas – y por ende, ninguna persona puede sustraerse del cumplimiento de este mandato, máxime si tomamos en cuenta el artículo 4 del Código Civil, que enseña: *“El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar”*.
- (iii) La actividad de conducción del demandante para el día de los hechos es ilegal, es contraria al ordenamiento jurídico, y en consecuencia, no puede alegar daño antijurídico imputable al Estado por la sencilla razón que el accidente y las lesiones en la salud son derivadas de la ilegalidad de su conducta.
- (iv) Con la ilegalidad de la conducta desaparece la acepción jurisprudencial que dispone: *“la persona no tiene el deber jurídico de soportar el daño”*, en razón que el demandante debe asumir y tolerar ese daño, mismo que él exteriorizó y lo llevó a la realidad por su propia irresponsabilidad, en la medida que jurídicamente estaba inhabilitado por el Estado para conducir vehículos, esto es, no había obtenido licencia de conducción.
- (v) Si bien es cierto que la salud y la integridad son bienes jurídicos protegidos por la Carta Política de 1991, también lo es que al Estado no puede atribuírsele responsabilidad cuando estos bienes jurídicos se ven afectados por el ejercicio de una actividad ilegal o ilícita

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN JURÍDICA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	<b>ACTUACIONES JUDICIALES</b>			
	<b>VIGENCIA</b> 28-oct-19	<b>VERSIÓN</b> 01	<b>CÓDIGO</b> GJ-F-054	<b>PAGINA</b> 4 de 4

Aunadamente, el H. Consejo de Estado en sentencia de 25 de abril del año 2012 <sup>1</sup> sostuvo que el daño antijurídico a efectos de que sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama, y son los siguientes:

*“i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente –que no se limite a una mera conjetura–, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido el ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo solicita, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar el interés que se debate en el proceso (...).”*

Además, el Alto Tribunal determinó que la antijuricidad del daño va encaminada a que no sólo se constate la materialidad y certidumbre de una lesión a un bien o interés amparado por la ley, sino que, precisamente, se determine que la vulneración o afectación de ese derecho o interés contravenga el ordenamiento jurídico, en tanto no exista el deber jurídico de tolerarlo.

En armonía con lo anterior, el Tribunal precisó una circunstancia que el juzgador debe tener en cuenta al momento de valorar la configuración del daño antijurídico, veamos:

*“De otro lado, es importante precisar que aquél no se relaciona con la legitimidad del interés jurídico que se reclama. En otros términos, no constituyen elementos del daño la anormalidad, ni la acreditación de una situación legítima o moralmente aceptada; **cosa distinta será la determinación de si la afectación proviene de una actividad o recae sobre un bien ilícito, caso en el que no habrá daño antijurídico derivado de la ilegalidad o ilicitud de la conducta de la víctima.** (...)”* (Subrayado y negrita fuera de texto original)

Así las cosas, solicito comedidamente a su Señoría valorar que la actividad que ejerció el señor Castillo y que derivó en un accidente de tránsito con las posteriores lesiones en su propia humanidad es una actividad ilegal, como quiera que no contaba con licencia de conducción que lo habilite para maniobrar la motocicleta, y por lo tanto, al exponerse de manera deliberada y dolosa a esa actividad al margen de la ley debe asumir las consecuencias de sus actos. En ese sentido, deviene acertada la decisión adoptada en sentencia por el señor Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto.

**II.- PETICIÓN**

Solicito respetuosamente a su Señoría despachar desfavorablemente el recurso de apelación y se confirme la absolución de toda responsabilidad para el municipio de Pasto.

Atentamente,

**CARLOS DAVID NARVÁEZ BACCA<sup>2</sup>**  
Apoderado del municipio de Pasto

<sup>1</sup> Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Concejero ponente Enrique Gil Botero, Expediente: 05001232500019942279 01, Radicación interna No.: 21.861

<sup>2</sup> El artículo 2 del Decreto 806 de 2020 prescribe que en virtud del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las actuaciones judiciales no requerirán de firmas manuscritas o digitales.